



Sanchismo: una autopsia económica

Datos y cifras del desastre socialista (2018-2026)

DIEGO SÁNCHEZ DE LA CRUZ



INSTITUTO
JUAN DE MARIANA



Sanchismo: una autopsia económica

Datos y cifras del desastre socialista (2018-2026)

Autor: Diego Sánchez de la Cruz

Octubre de 2026, Instituto Juan de Mariana. Madrid, España

juandemariana.org

Índice

Resumen ejecutivo	4
Introducción	6
1 Vivienda: una crisis fabricada en Moncloa	7
2 Impuestos, deuda y pensiones: la mayor escalada fiscal de la democracia	10
3 Empleo: paro maquillado, sueldos aplanados y más dependencia	14
4 Servicios básicos: todo funciona peor con recaudación récord	17
Sobre el autor	22

Resumen ejecutivo

Ocho años después de la moción de censura de 2018, y a las puertas de las Elecciones Generales previstas para el 29 de noviembre de 2026, el IJM somete el balance económico del Gobierno de Pedro Sánchez a una “autopsia” en cuatro ámbitos: vivienda, impuestos, empleo y provisión de servicios básicos. El diagnóstico es demoledor, puesto que retrata una España en declive, con la vivienda inaccesible, una presión fiscal insoportable, un mercado laboral renqueante y un desempeño cada vez peor en campos como la educación, la salud o las infraestructuras.

01 **Vivienda: una crisis fabricada por el Estado**

El Banco de España cifra en unas 750.000 viviendas el déficit acumulado entre 2021 y 2025. La oferta de alquiler permanente cayó un 33 por ciento entre 2019 y 2024 y el alquiler marca máximos de 15,3 euros por metro cuadrado. Los topes de la Ley de Vivienda han hundido los contratos un 43 por ciento en Barcelona, un 44 por ciento en Navarra y un 51 por ciento en A Coruña. En caso de ser aprobados por la Diputación Permanente del Congreso, los “decretos Maricarmen” agravarán más aún el problema.

02 La mayor escalada fiscal de la democracia

Desde 2018, la recaudación ha crecido en 168.166 millones (+39,7 por ciento) y la presión fiscal ha alcanzado el 37,1 por ciento del PIB, con 141 subidas de impuestos y cotizaciones. Para un trabajador a tiempo completo, la “cuña fiscal” sube un 11 por ciento, pero el sueldo cae un 4 por ciento. Agregando todos los tributos y cotizaciones, el Estado se queda ya con el 53,6 por ciento del coste laboral de un sueldo medio. Pese a esta fiscalidad asfixiante, la deuda pública marca récord: supone 1,763 billones. La “bomba de relojería” de nuestro actual sistema es la Seguridad Social, donde 1 de cada 4 euros de pensiones se están pagando a crédito.

03 Un paro maquillado y unos sueldos aplanados

Casi el 80 por ciento de la caída del paro registrado entre 2019 y 2025 se explica por los fijos discontinuos inactivos, que han dejado de contar como parados. El SMI ha subido un 66 por ciento, pero la brecha entre el salario más frecuente y el mínimo se ha reducido del 40 al 3 por ciento, de modo que los ingresos de los trabajadores se están aplanando. Además, se estima que unos 7 millones de personas reciben ayudas asistenciales, de modo que la dependencia del Estado no para de acrecentarse.

04 Gasto récord... con los peores servicios básicos de la historia reciente

El gasto sanitario y educativo ha crecido más de un 40 por ciento, pero las listas de espera quirúrgicas suben un 28 por ciento y el Informe PISA 2025 arroja las peores notas de la serie. Nuestra justicia es de las más lentas de la UE y las infraestructuras presentan un deficiente estado de conservación que trae consigo accidentes, retrasos y problemas recurrentes. El Gobierno ha sido especialmente incapaz a la hora de gestionar crisis sobrevenidas, como la pandemia de covid-19, la DANA de Valencia o la invasión de Ceuta.

Introducción

El Gobierno de Pedro Sánchez sostiene que la economía española «va como un cohete». El presente informe somete ese relato a una autopsia: en lugar de los titulares de crecimiento agregado que pretende divulgar un Ejecutivo interesado en el análisis de trazo grueso, el IJM ha examinado en profundidad los indicadores que determinan el bienestar de los ciudadanos. El resultado es un diagnóstico consistente en las cuatro áreas analizadas.

La vivienda se ha convertido en el primer problema del país por decisiones regulatorias y fiscales. Los contribuyentes soportan la mayor escalada tributaria de la democracia, que convive con una deuda récord y con un sistema de pensiones financiado a crédito. El mercado laboral exhibe una mejora del paro en buena parte estadística, una compresión salarial sin precedentes y una dependencia creciente de los subsidios. Y los servicios básicos funcionan mucho peor que en 2018, pese a disponer de más recursos que nunca.

España nunca había recaudado tanto y, sin embargo, casi todo lo que depende del Estado funciona peor. El problema no es de medios, sino de modelo.

1 Vivienda: una crisis fabricada en Moncloa

Menos oferta, más impuestos y controles de precios que empeoran el problema que dicen resolver

La vivienda es hoy el primer problema de los españoles: el 43,5 por ciento la menciona en el barómetro del CIS, un máximo histórico. Desde 2015, el precio de la vivienda ha subido un 79,9 por ciento, frente al 26,8 por ciento del IPC. El alquiler alcanzó en el segundo trimestre de 2026 un récord de 15,3 euros por metro cuadrado, frente a los 11,8 euros de septiembre de 2023: un 30 por ciento más en menos de tres años. El alquiler mediano (1.080 euros) ya supera el salario mediano de un joven (1.048 euros), y solo el 15,2 por ciento de los jóvenes vive emancipado, el peor dato desde 2006.¹

1.1 Un problema de oferta, no de especulación

El discurso oficial atribuye el problema a la especulación, a los pisos turísticos o a las viviendas vacías. Los datos lo desmienten. Entre agosto de 2024 y noviembre de 2025, los pisos turísticos se redujeron un 18,2 por ciento y, en ese mismo periodo, la vivienda se encareció un 12,9 por ciento; además, suponen apenas el 1,24 por ciento del parque. Casi la mitad de las viviendas vacías está en municipios de menos de 10.000 habitantes, y en las ciudades de más de 250.000 la tasa es de solo el 7,4 por ciento.

¹ D. Sánchez de la Cruz, S. Calvo López, F. Pinto Hernández, D. Fernández Méndez y R. Griffith, «Un país sin casas», prólogo de J. R. Rallo, Ediciones Jarana e Instituto Juan de Mariana, junio de 2026.

El problema es de oferta. El Banco de España estima un déficit de unas 750.000 viviendas acumulado entre 2021 y 2025, tras un último año en el que se formaron unos 240.000 hogares y se terminaron 92.000 viviendas. Según explica el libro coral *Un país sin casas*, firmado por investigadores asociados al IJM, desde 2021 se han creado 1,16 millones de hogares, pero solo se han terminado 465.000 viviendas libres. De hecho, España inicia 2,7 viviendas por cada 1.000 habitantes, de modo que construimos la mitad que a comienzos de los años 90. El déficit es tan abultado que equivale a una década sin construir ni una sola unidad residencial.²

1.2 Un bloqueo administrativo

La escasez es el resultado de un Estado que impide construir:

- El 95,7 por ciento del territorio está clasificado como suelo no urbanizable y convertir un terreno en solar edificable exige entre diez y quince años, pese a que las propias Administraciones poseen en torno al 58 por ciento del suelo urbano sin edificar.
- El retraso en las licencias encarece cada vivienda en 18.000 euros.
- A ello se suma una fiscalidad que grava la vivienda al construirla, comprarla, tenerla, venderla y heredarla: las Administraciones recaudan 52.200 millones de euros al año ligados a la vivienda y casi una cuarta parte del precio de la obra nueva son impuestos.
- En conjunto, casi un tercio del precio de una vivienda nueva se explica por decisiones políticas.³

El Gobierno, además, ha desaprovechado los recursos de que disponía. Al renunciar a 61.700 millones de euros en préstamos del Plan de Recuperación, dejó sin financiar unas 440.000 viviendas de alquiler asequible mediante fórmulas público-privadas como el Plan Vive madrileño, quince veces más que la línea ICO de 43.000 viviendas que anunció en 2024.⁴

1.3 La Ley de Vivienda: menos oferta, alquileres más caros

La respuesta del Ejecutivo ha sido intervenir los precios, primero con la reforma de la LAU de 2019 y después con la Ley de Vivienda de 2023. Entre 2019 y 2024, la oferta de alquiler permanente se redujo un 33 por ciento en España, un 46 por

² Véase la nota 1.

³ Véase la nota 1. El dato de encarecimiento de licencias ha sido ajustado para tomar en cuenta el IPC.

⁴ Foro Regulación Inteligente, “Los 61.700 millones que no fueron casas”, octubre de 2026, <https://regulacioninteligente.org/espana-renuncia-a-61-700-millones-de-fondos-europeos-con-los-que-se-podrian-haber-financiado-440-000-viviendas-asequibles/>.

ciento en Madrid y un 75 por ciento en Barcelona; si en 2019 competían siete familias por cada anuncio, en 2024 eran 32.⁵

Allí donde se han aplicado los topes, el patrón se repite. En Barcelona, los contratos firmados han caído un 22,5 por ciento desde la entrada en vigor de los topes y un 43 por ciento desde 2021, mientras el alquiler de temporada, que escapa al control, ha pasado del 7,1 al 23,6 por ciento de los contratos; el precio por metro cuadrado marcó un máximo de 16,8 euros, y la renta media solo baja porque se alquilan pisos más pequeños. En Navarra, los contratos en zonas tensionadas pasaron de 1.204 a 672 en dos trimestres (-44 por ciento); en A Coruña, de 718 a 354 en cinco meses (-51 por ciento). Y lo peor está por venir: un 34 por ciento de los propietarios cuyos contratos vencen en 2027 prevé retirar su vivienda del alquiler de larga duración.

TABLA 1. LA CRISIS DE LA VIVIENDA EN CIFRAS

Indicador	Dato	Referencia
Déficit de viviendas (Banco de España)	≈750.000	2021-2025
Hogares creados / viviendas terminadas	240.000 / 92.000	2025
Precio de la vivienda / IPC	+79,9% / +26,8%	desde 2015
Alquiler (Idealista)	15,3 €/m ² (+30%)	T2 2026 vs sep. 2023
Oferta de alquiler permanente	-33%	2019-2024
Contratos: Barcelona / Navarra / A Coruña	-43% / -44% / -51%	tras los topes
Jóvenes emancipados	15,2%	mínimo desde 2006

Fuente: elaboración propia a partir de Banco de España, Idealista e Instituto Juan de Mariana.

La experiencia internacional apunta en la misma dirección. En Berlín, el tope de 2020 redujo la oferta cinco veces más que los precios; en Estocolmo, tras ochenta años de control, conseguir un piso de alquiler exige esperar más de once años. Donde se deja construir, como en Austin, Auckland o Minneapolis, los alquileres se moderan.⁶ La crisis de la vivienda no es un fallo del mercado, sino del Estado: una crisis fabricada en Moncloa.

⁵ Europa Press, «El stock de vivienda de alquiler ha caído un 33% en los últimos cinco años, según Idealista», 18 de octubre de 2024, <https://www.bolsamania.com/noticias/empresas/economia--el-stock-de-vivienda-de-alquiler-ha-caido-un-33-en-los-ultimos-cinco-anos-segun-idealista--17729166.html>.

⁶ Véase la nota 1.

2 Impuestos, deuda y pensiones: la mayor escalada fiscal de la democracia

141 subidas de impuestos y cotizaciones, deuda superior al 100% del PIB y un sistema de pensiones que se paga a crédito

Desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, la recaudación por impuestos y cotizaciones ha pasado de 423.513 millones de euros en 2018 a 591.679 millones en 2024, un aumento de 168.166 millones (+39,7 por ciento) que ha elevado la presión fiscal del 34,9 al 37,1 por ciento del PIB, el nivel más alto jamás registrado. La Comisión Europea prevé 671.500 millones en 2026 (38,3 por ciento del PIB): 248.000 millones más que en 2018 (+58,5 por ciento), el equivalente a 13.000 euros por hogar y una subida de 3,4 puntos de PIB sin precedentes en ningún otro mandato.⁷

España ha ido a contracorriente de Europa. Entre 2018 y 2024, mientras su presión fiscal subía 2,2 puntos, la de la UE-27 bajaba 0,6 puntos y hasta diez Estados miembros, entre ellos Francia (-2,9), Suecia (-2,5) o Bélgica (-1,9), aliviaban la carga sobre sus contribuyentes. España es el quinto país de la Unión donde más ha crecido

⁷ D. Sánchez de la Cruz y S. Calvo López, «Impuestómetro 2026», Instituto Juan de Mariana, marzo de 2026, <https://juandemariana.org/wp-content/uploads/2026/03/IMP-2026-report.pdf>.

la presión fiscal. La brecha con la media europea se ha reducido de 6 a 3,2 puntos, pero no porque los españoles ganen más, sino porque pagan más.

2.1 141 subidas de impuestos y cotizaciones

El *Impuestómetro* 2026 del IJM documentó 141 subidas de impuestos y cotizaciones entre 2018 y 2025, con 63 subidas explícitas aprobadas por norma (nuevos impuestos a la banca, las energéticas, las grandes fortunas, los envases de plástico o los servicios digitales; el Mecanismo de Equidad Intergeneracional; las subidas de las bases máximas y la cuota de solidaridad, entre otras), 46 subidas encubiertas por no deflactar los tramos del IRPF y 32 derivadas de revisiones catastrales. Solo en 2026 se suman 15 nuevas.

La práctica totalidad del aumento ha recaído sobre el trabajo (+2,2 puntos de PIB). La no deflatación del IRPF, con una inflación acumulada del 23,2 por ciento entre 2018 y 2025, ha generado más de 27.600 millones de euros de recaudación adicional solo entre 2019 y 2023, y lo ha hecho de forma regresiva: un trabajador con 18.000 euros brutos paga hoy casi el triple de IRPF que en 2018, a igual poder adquisitivo, mientras que un asalariado que percibe 75.000 euros paga un 12 por ciento más.

Los impuestos directos pagados por las familias han crecido un 56,3 por ciento en términos nominales y un 31,1 por ciento en términos reales desde 2018: cada hogar paga 1.657 euros más al año en euros constantes, y el esfuerzo fiscal directo ha subido del 13,6 al 15,9 por ciento de la renta bruta disponible, el quinto mayor aumento de la UE.

Para un asalariado medio, cuyo coste laboral asciende a 39.481 euros, el Estado se queda con 21.144 euros, el 53,6 por ciento, al sumar cotizaciones, IRPF, IVA, tributos municipales, impuestos especiales, la incidencia del Impuesto de Sociedades y la carga diferida del déficit. A lo largo de su vida, un contribuyente medio paga 460.600 euros en impuestos, el equivalente a casi treinta años del salario más frecuente.

2.2 Deuda por encima del 100% del PIB y pensiones financiadas a crédito

La recaudación récord no ha servido para sanear las cuentas. El gasto público consolidado alcanzó 725.006 millones en 2024, 221.813 millones más que en 2018 (+44,1 por ciento), y uno de cada tres euros adicionales se destinó a pensiones.⁸ La deuda de las Administraciones Públicas marcó en junio de 2026 un máximo histórico de 1,763 billones de euros (101,5 por ciento del PIB), unos 600.000 millones más que a mediados de 2018. Solo los intereses costaron 39.644 millones en 2024.

El núcleo del desequilibrio es el sistema de pensiones. En 2025, el gasto contributivo de la Seguridad Social ascendió a 243.135 millones de euros y las cotizaciones sumaron 179.419 millones: un déficit contributivo de 63.716 millones, el 3,8 por ciento del PIB. Las cotizaciones solo cubren tres de cada cuatro euros que paga el sistema; el resto sale de los Presupuestos, que transfirieron 61.342 millones en 2025. Medido como saldo básico, el agujero llega a 69.783 millones (4,2 por ciento del PIB), y aun con las transferencias el sistema cerró con un déficit de más de 8.200 millones.⁹

El patrimonio neto de la Seguridad Social, positivo en 54.000 millones en 2011, es hoy negativo en más de 121.000 millones, y el Fondo de Reserva ha pasado de 66.000 millones a menos de 10.000, apenas dos semanas de nóminas. Se estima que alrededor del 80 por ciento del aumento de la deuda pública entre 2010 y 2024 se explica por las transferencias para cubrir el déficit de las pensiones, y la deuda implícita del sistema ronda los 1,58 billones, cerca del 130 por ciento del PIB.¹⁰ El MEI, un impuesto adicional sobre el empleo, no ha corregido la tendencia: simplemente ha encarecido el trabajo.

⁸ D. Sánchez de la Cruz y S. Calvo, «El agujero contributivo de la Seguridad Social», Instituto Juan de Mariana, octubre de 2025, <https://juandemariana.org/el-agujero-contributivo-de-la-seguridad-social/>.

⁹ Elaboración propia a partir de Seguridad Social, ejecución presupuestaria y balance del sistema, 2025.

¹⁰ Instituto Santalucía, estimación sobre la contribución de las transferencias a la Seguridad Social al aumento de la deuda pública 2010-2024; Eurostat, Tabla 29 de compromisos de pensiones devengados (2021).]

TABLA 2. BALANCE FISCAL DEL PERIODO 2018-2026

Indicador	2018	Último dato
Recaudación (millones de €)	423.513	591.679 (2024)
Presión fiscal (% del PIB)	34,9%	37,1% (2024)
Subidas de impuestos y cotizaciones	—	141 (2018-2026)
Carga fiscal sobre el salario medio	—	53,6% del coste laboral
Deuda pública (billones de €)	≈1,16	1,763 (jun. 2026)
Déficit contributivo de pensiones	—	63.716 M€ (2025)

Fuente: elaboración propia a partir de *Impuestómetro 2026*, Banco de España y Seguridad Social.

3 Empleo: paro maquillado, sueldos aplanados y más dependencia

Lo que esconden las estadísticas de paro registrado

El Gobierno presenta cada mes el paro registrado como prueba del éxito de su reforma laboral de 2011. Pero esa cifra excluye a los «demandantes de empleo con relación laboral»: personas que buscan trabajo y no están trabajando, pero que mantienen un vínculo contractual con una empresa. Los principales son los fijos discontinuos en periodo de inactividad. Pensemos en un jornalero contratado como fijo discontinuo para la vendimia: trabaja cada septiembre y pasa el resto del año sin empleo y apuntado como demandante, pero, como su contrato sigue en vigor, no computa como parado en ningún momento. Mientras esta figura era marginal, el efecto estadístico era menor; la contrarreforma de 2011 la convirtió en el sustituto de buena parte de los contratos temporales.

3.1 Casi el 80 por ciento de la caída del paro es estadística

Si se suman al paro registrado los demandantes con relación laboral se obtiene lo que Fedea denomina «paro efectivo». Entre diciembre de 2019 y diciembre de 2025, el paro registrado bajó en 755.000 personas, pero el paro efectivo solo lo hizo en 163.000. Es decir, el 78 por ciento de la reducción del paro de la que presume el Gobierno (casi cuatro de cada cinco «parados menos») se explica por el aumento de los demandantes con relación laboral, que se han triplicado: de 301.000

a finales de 2019 a 893.000 a finales de 2025, y 919.000 en enero de 2026.¹¹ La tasa de paro de la EPA, elaborada con criterios de la OIT, no depende de esta clasificación administrativa, pero sigue siendo la más alta de la Unión Europea. El Gobierno puede atribuirse que hoy trabajen más personas que en 2019; no que haya acabado con el paro.

3.2 El SMI: exclusión laboral y aplanamiento salarial

El salario mínimo ha pasado de 735,9 euros mensuales en 2018 a 1.221 euros en 2026, una subida del 66 por ciento. Sus efectos sobre los trabajadores menos cualificados son visibles. Entre 2013 y 2018, el empleo en ocupaciones elementales y en el resto creció a ritmos casi idénticos (13,4 y 14,3 por ciento); entre 2018 y 2023, el primero creció un 1,4 por ciento y el segundo un 9,7 por ciento: por cada empleo elemental se crearon siete en el resto. Con el mismo ritmo, España tendría unos 210.000 empleos elementales más.¹² Entre junio de 2018 y mayo de 2025, la afiliación de empleadas del hogar cayó en casi 71.000 personas (-17 por ciento), hasta niveles de 2011, y la del sistema agrario en 66.000 (-9 por ciento).¹³ La propia AIREF atribuye a las subidas del SMI la destrucción de hasta 151.000 empleos.¹⁴ A la exclusión se suma el aplanamiento de la escala salarial. En términos reales, el salario modal (el más frecuente) cayó de cerca de 16.000 euros a menos de 14.000 entre 2018 y 2023, mientras el SMI subía un 26 por ciento. La distancia entre ambos, que en 2011 superaba los 8.400 euros anuales, era de apenas 400 euros en 2023: del 40 al 3 por ciento.¹⁵ El salario mínimo se ha convertido en el salario más habitual del país, y tres de cada cuatro asalariados (el 74,8 por ciento) ganan hasta dos veces el SMI. Cuando el mínimo legal y el sueldo más común casi coinciden, desaparece el premio a la formación, la experiencia y la responsabilidad, y los salarios dejan de reflejar la productividad y obedecen a lo que decide el Consejo de Ministros.

¹¹ Elaboración propia a partir de las estadísticas de demandantes de empleo del SEPE, <https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/estadisticas/empleo/estadisticas-nuevas.html>, siguiendo la metodología de «paro efectivo» de Fedea.

¹² Instituto Juan de Mariana, «Las sombras del mercado laboral español: paro privado, maquillaje estadístico y exclusión laboral», marzo de 2024, <https://juandemariana.org/wp-content/uploads/2024/03/Las-sombras-del-mercado-laboral-espanol-Paro-privado-maquillaje-estadistico-y-exclusion-laboral-B10-1.pdf>.

¹³ D. Sánchez de la Cruz, «El salario mínimo fulmina el empleo doméstico y la afiliación se desploma a niveles de hace 14 años», Libertad Digital, 30 de junio de 2025, a partir de datos de afiliación de la Seguridad Social, <https://www.libertaddigital.com/libremercado/2025-06-30/lu-el-salario-minimo-fulmina-el-empleo-domestico-y-la-afiliacion-se-desploma-a-niveles-de-hace-14-anos-7270841/>.

¹⁴ El Español, «Las subidas del salario mínimo causaron la destrucción de hasta 151.000 empleos, según la AIREF», 30 de mayo de 2026, https://www.elespanol.com/invertia/economia/empleo/20260530/subidas-salario-minimo-causaron-destruccion-empleos-airef/1003744266056_0.html.

¹⁵ D. Sánchez de la Cruz y F. Pinto, «Igualitarismo salarial y empobrecimiento económico. Así se aplanan los sueldos tras las subidas masivas del SMI y otras políticas redistributivas», Instituto Juan de Mariana, noviembre de 2024, <https://juandemariana.org/wp-content/uploads/2025/11/SMI.pdf>.

3.3 Absentismo y dependencia del Estado

La segunda anomalía es el absentismo, que se ha disparado un 53 por ciento y cuyo coste total asciende a 129.000 millones de euros, el 8,1 por ciento del PIB; cada día laborable faltan a su puesto alrededor de un millón y medio de trabajadores.¹⁶ La tercera es la dependencia de las transferencias: según los datos de Fedea recogidos por Libre Mercado, las ayudas a colectivos vulnerables subsidian a unos 7 millones de personas con un coste de 28.500 millones de euros anuales.¹⁷

El Ingreso Mínimo Vital llega ya a más de 2,6 millones de personas en 860.458 hogares, pese a que la tasa AROPE de pobreza y exclusión apenas se ha movido: 26,1 por ciento en 2018 y 25,8 por ciento en 2024.¹⁸ Cuando aceptar un empleo supone perder la prestación casi euro por euro y el trabajo disponible paga poco más que el subsidio, el incentivo a buscarlo se debilita. Lo que se extiende no es la prosperidad, sino la dependencia del Estado.

TABLA 3. EL MERCADO LABORAL DETRÁS DEL RELATO OFICIAL

Indicador	Dato	Periodo
Caída del paro registrado	-755.000	dic. 2019-dic. 2025
Caída del paro efectivo	-163.000	dic. 2019-dic. 2025
Peso del maquillaje en la caída del paro	78%	dic. 2019-dic. 2025
Demandantes con relación laboral	301.000 → 919.000	2019-ene. 2026
SMI mensual (14 pagas)	735,9 € → 1.221 €	2018-2026 (+66%)
Brecha salario modal-SMI	40% → 3%	2011-2023
Perceptores de ayudas asistenciales	≈7 millones	Fedea

Fuente: elaboración propia a partir de SEPE, Fedea, Seguridad Social e Instituto Juan de Mariana.

¹⁶ Foro Regulación Inteligente, «Regulación laboral y mercado de trabajo: el impacto del absentismo», enero de 2026, <https://regulacioninteligente.org/el-absentismo-laboral-se-dispara-un-53-y-su-coste-total-asciende-a-129-000-millones-de-euros-el-81-del-pib/>.
¹⁷ Libre Mercado, «Las ayudas a colectivos vulnerables subsidian a 7 millones de personas y cuestan 28.500 millones», 11 de marzo de 2025, <https://www.libertaddigital.com/libremercado/2025-03-11/las-ayudas-a-colectivos-vulnerables-subsidian-a-7-millones-de-personas-y-cuestan-28500-millones-7228944/>.
¹⁸ Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, «El Ingreso Mínimo Vital llega en junio a más de 2,6 millones de personas que residen en 860.458 hogares», 7 de julio de 2026, <https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/inclusion/Paginas/2026/070726-ingreso-minimo-vital-junio.aspx>; INE, Encuesta de Condiciones de Vida (tasa AROPE).

4 Servicios básicos: todo funciona peor... con recaudación récord

Sanidad, educación, justicia, infraestructuras, emergencias y fronteras

Entre 2018 y 2024, el gasto sanitario público pasó de 71.114 a 101.739 millones de euros (+43 por ciento) y el educativo, de 50.807 a 71.349 millones (+40 por ciento); descontada la inflación, ambos crecieron cerca de un 20 por ciento en términos reales.¹⁹ Nunca se había dedicado tanto dinero a los pilares del Estado del bienestar. Y, sin embargo, los resultados han empeorado.

4.1 Sanidad, educación y justicia

En diciembre de 2025, 853.509 pacientes esperaban una operación en la sanidad pública, frente a 668.288 en diciembre de 2018 (+28 por ciento); la proporción que espera más de seis meses ha subido del 20,0 al 21,6 por ciento. En consultas con el especialista, los pacientes en espera por cada mil habitantes han pasado de 62,5 a 84,4 (+35 por ciento) y la espera media, de 96 a 102 días.²⁰ El informe PISA 2025

¹⁹ Ministerio de Sanidad, Estadística de Gasto Sanitario Público, 2018-2024; Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, Estadística del Gasto Público en Educación.

²⁰ Ministerio de Sanidad, «Sistema de Información sobre Listas de Espera en el Sistema Nacional de Salud (SISLE-SNS)», cortes de diciembre de 2018, https://mirror.mschs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/docs/LLEE_SNS_IndicadoresResumen_Diciembre2018.pdf, y de diciembre de 2025, https://www.sanidad.gob.es/gl/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/docs/Nota_Resumen_SISLE_dic25.pdf.

otorgó a España sus peores notas desde que participa en la evaluación, con retrocesos simultáneos en matemáticas, lectura y ciencias.²¹

En justicia, un litigio civil o mercantil tardaba en 2023 una media de 444 días en resolverse en primera instancia, el quinto peor registro de los 24 países de la UE con datos y casi el doble que en Alemania (249) o Portugal (267). La tasa de resolución civil cayó del 98 por ciento en 2022 al 81,5 por ciento en 2024, y España cuenta con 11,1 jueces por cada 100.000 habitantes, menos de la mitad de la mediana europea (23,4).²²

4.2 Infraestructuras y emergencias: el Estado que no está

El *stock* de capital público en España ha sufrido un severo retroceso en la última década, desplomándose desde el 44,3% del PIB en 2013 hasta el 34,6% en 2024. Esta caída evidencia que, mientras la actividad económica del país ha seguido desarrollándose, la inversión en infraestructuras clave, como carreteras y vías ferroviarias, se ha reducido, provocando graves problemas por la falta de mantenimiento.²³

En la red de carreteras, se estima que el coste de reparar la progresiva degradación de las vías ha subido más de un 40 por ciento en los últimos años.²⁴ El número de kilómetros en situación precaria se ha triplicado y supera los 34.000 kilómetros. Cada año, la inversión en carreteras se queda 10.000 millones por debajo de los niveles necesarios para preservar estas infraestructuras – y todo a pesar de la ingente cantidad de recursos que obtiene el Estado a través de la fiscalidad aplicable al automóvil. En cuanto al ferrocarril, los indicadores reflejan problemas recurrentes de puntualidad, con un desplome de hasta el 50 por ciento en estos indicadores y la implantación generalizada de limitaciones de velocidad como respuesta a un número cada vez más abultado de accidentes que refleja el desbarajuste en materia de inversión en mantenimiento de las vías.

²¹ OCDE, «PISA 2025 Results», septiembre de 2026, <https://www.oecd.org/en/about/programmes/pisa.html>.

²² Comisión Europea, «The 2025 EU Justice Scoreboard», gráfico 5, https://commission.europa.eu/document/download/4c9fb0bf-7912-450b-ac7e-6f1d044a9585_en; Consejo de Europa (CEPEJ), «Spain: country fiche», <https://rm.coe.int/spain-country-fiche/48802c1531>.

²³ Instituto de Estudios Económicos, «La necesidad de aumentar las inversiones en infraestructuras en España», marzo de 2026, <https://www.ieemadrid.es/es/actualidad/noticias-del-iee/la-necesidad-de-aumentar-las-inversiones-en-infraestructuras-en-espana>.

²⁴ Asociación Española de la Carretera, «Las carreteras españolas, en el peor momento de su historia reciente», 3 de julio de 2025, https://asefma.es/wp-content/uploads/2025/07/NP-Auditoria-estado-carreteras-AEC-2025_DEF_con-QR_03-07-25.pdf.

La gestión de grandes escenarios de crisis confirma un patrón de manifiesta ineficacia. En la pandemia, España registró durante la primera ola el mayor exceso de mortalidad de la UE (+80,8 por ciento) y cerró 2020 con una mortalidad un 18 por ciento superior a la de 2016-2019, frente al 11,9 por ciento de media europea; fue, con Estados Unidos, el país de la OCDE donde más cayó la esperanza de vida.²⁵ Al mismo tiempo, sufrió la mayor caída del PIB de la Unión, un 10,8 por ciento, la peor desde la Guerra Civil.²⁶ Peor resultado sanitario y peor resultado económico a la vez.

En la misma línea, la DANA que cayó sobre Valencia el 29 de octubre de 2024 dejó 237 víctimas mortales y una sucesión de fallos de coordinación entre administraciones, con ayudas que han tardado en llegar y una reconstrucción todavía desigual.²⁷

En Ceuta, los días 17 y 18 de mayo de 2021, más 12.000 personas entraron de manera descontrolada e irregular en la ciudad, todo en un lapso de 48 horas, lo que obligó a desplegar al Ejército. En julio de 2026, la ciudad volvía a registrar una crisis de este corte, pero esta vez con más de 80.000 llegadas en unas pocas horas. La debilidad exhibida por el Ejecutivo ante el régimen marroquí alienta este tipo de invasiones impulsadas por una autocracia hostil que pretende anexionar los territorios españoles del Norte de África.

²⁵ Eurostat, estudio sobre exceso de mortalidad, recogido en The Objective, «La mortalidad excesiva en España creció un 3,2% en marzo, menos que la media de la UE», 13 de mayo de 2022, <https://theobjective.com/sociedad/2022-05-13/mortalidad-excesiva-espana-marzo/>; Instituto de Salud Carlos III y otros, «Excess Mortality During 2020 in Spain», Cambridge University Press, 2024, <https://core-cms.cambridgecore.org/core/product/19785427A5E5916CDB2C90F599855F5F/core-reader>.

²⁶ INE, revisión de la Contabilidad Nacional de 2020, recogida en Vozpópuli, <https://www.vozpopuli.com/economia/pib-2020-revision.html>.

²⁷ Vozpópuli, «Moncloa prepara una encerrona a Mazón con el funeral de la DANA», octubre de 2025, <https://www.vozpopuli.com/espana/politica/moncloa-prepara-una-encerrona-a-mazon-con-el-funeral-de-la-dana-evita-invitar-a-feijoo-y-tellado.html>.

4.3 Inmigración irregular y seguridad

Según Funcas, los inmigrantes en situación irregular pasaron de unos 107.000 en 2017 a unos 840.000 a comienzos de 2025: se multiplicaron por ocho en ocho años.²⁸ La regularización extraordinaria de 2026 recibió casi 1,2 millones de solicitudes, más del doble de las 500.000 estimadas inicialmente.²⁹ Una regularización de esa escala es la prueba de que no existe un control efectivo de las fronteras.

La política migratoria debe estar abierta al talento y al trabajo, pero basada en reglas, mérito y tolerancia cero con el delito. En este sentido, los datos de seguridad son elocuentes. En Cataluña, el 65,5 por ciento de las 46.996 detenciones de los Mossos en 2024 correspondió a extranjeros, que suponen el 18 por ciento de la población; en 2025, eran extranjeros el 84,3 por ciento de los detenidos por hurto, el 73 por ciento por robo con violencia y el 60,3 por ciento por agresión sexual. En el País Vasco, la Ertzaintza situó en el 64,2 por ciento la proporción de detenidos extranjeros entre enero y septiembre de 2025, con un 68 por ciento en agresiones sexuales y un 77 por ciento en robos con violencia; en Navarra, los extranjeros fueron presuntos autores del 62,96 por ciento de los delitos sexuales.³⁰

Sin embargo, España tiene un porcentaje de éxito de apenas un 11 por ciento a la hora de tramitar deportaciones, tres veces por debajo de la media comunitaria y seis veces peor que aquellos países con mejor desempeño, como Suecia o Alemania. De poco sirven las órdenes de expulsión si luego no se cumplen y somos el segundo país de la UE con peor bagaje en dicho campo, solamente por delante de Portugal.

²⁸ Funcas, estimación de la población extranjera en situación irregular, 2025.]

²⁹ Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, «El plazo de presentación para la regularización extraordinaria concluye con 1.174.978 solicitudes recibidas», 2 de julio de 2026, <https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/inclusion/Paginas/2026/020726-balance-regularizacion-extraordinaria.aspx>.

³⁰ El Español, «Los extranjeros cometen el 60% de las agresiones sexuales en Cataluña y el 73% de los robos», 11 de mayo de 2026, https://www.elspanol.com/espana/politica/20260511/extranjeros-cometen-agresiones-sexuales-cataluna-robos-mossos/1003744238458_0.amp.html; Valencia News, «Los nuevos datos de detenciones en Cataluña tensan el debate político», 23 de noviembre de 2025, <https://valencianews.es/?p=392884>; The Objective, 21 de marzo de 2026, <https://theobjective.com/espana/2026-03-21/policia-extranjeros-espanoles-territorio-nacional/>.

Con la mayor recaudación de su historia, el Estado ofrece peor sanidad, peor educación, una justicia más lenta, infraestructuras menos fiables y un control de fronteras que no funciona. No falta dinero; sobran incentivos equivocados.

TABLA 4. MÁS GASTO, PEORES SERVICIOS

Indicador	2018	Último dato
Gasto sanitario público (M€)	71.114	101.739 (2024)
Pacientes en lista de espera quirúrgica	668.288	853.509 (2025)
Espera media al especialista (días)	96	102 (2025)
Resolución civil, 1.ª instancia (días)	—	444 (2023)
Inmigrantes irregulares (Funcas)	≈107.000 (2017)	≈840.000 (2025)
Solicitudes de regularización	—	1.174.978 (2026)
Recaudación tributaria (M€)	423.513	591.679 (2024)

Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Sanidad, Comisión Europea, Funcas, Ministerio de Inclusión y Eurostat.

Sobre el IJM

Desde su creación en 2005, el IJM se ha consolidado como el centro de estudios liberal más influyente de Hispanoamérica. Con más de 400 menciones anuales en medios y cerca de 9.300 estudiantes en sus cursos de formación, el IJM mantiene asimismo una intensa línea de investigación y publicación de libros, estudios e informes, tarea que complementa con la celebración y promoción de eventos y conferencias que han reunido a más de 8.500 asistentes en 2026. A todo ello hay que sumarle una intensa presencia en redes sociales, con más de 215.000 suscriptores y 13 millones de visualizaciones anuales en sus principales canales. Fundado y presidido por **Gabriel Calzada** en 2005, el IJM está dirigido desde 2023 por **Manuel Llamas**.

El autor del informe, **Diego Sánchez de la Cruz**, es el Jefe de Estudios del IJM, CEO de Foro Regulación Inteligente e investigador asociado del Instituto de Estudios Económicos. Es autor o coautor de siete libros y traductor de más de una treintena de obras. Colabora de forma habitual en prensa, radio y televisión. Imparte docencia en universidades y escuelas de negocio.



juandemariana.org